

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En autos RIT O-531-2022, RUC 2240041510-1, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, caratulados “Annemarie Müller During con Fisco de Chile (Servicio Nacional de Menores)”, por sentencia de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se desestimó la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado, cobro de prestaciones laborales y nulidad del despido.

La demandante dedujo recurso de nulidad y una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por resolución de nueve de agosto de dos mil veintitrés, lo rechazó.

En contra de este último pronunciamiento, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que la materia de derecho que se solicita unificar consiste en “determinar la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado, en cuanto a si las funciones desplegadas corresponden o no a los requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si estas se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia”.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por esta Corte en autos Rol N° 50-2018, 1.020-2018, 2.995-2018, 24.676-2020 y 119.187-2020, en las que se sostuvo que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre personas naturales y organismos de la Administración del Estado, en la medida que se desarrollen fuera del marco legal que los autoriza a contratar sobre la base de honorarios, y que revelen características propias de un contrato de trabajo. Dicho criterio jurídico condujo a



calificar como laborales los contratos celebrados entre los demandantes y los órganos demandados en cada caso.

En la primera, el de una asistente social que se vinculó con la Municipalidad de Recoleta, entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, como asesora laboral y familiar, debiendo revisar y digitar fichas de protección social, en el marco de un convenio de transferencia de fondos celebrados entre esa demandada y el FOSIS, cumpliendo jornada de 44 horas semanales y recibiendo instrucciones.

En la segunda, se aplicó el mismo razonamiento, respecto de un profesional que se incorporó a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, entre el 2 de junio de 2013 y el 28 de febrero de 2017, como asistente social en el programa Entidad Patrocinadora, EP y Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, Oficina de la Vivienda, en funciones de atención de público y elaboración de diagnósticos sociales, que debía ejecutar en un horario determinado, con obligación de asistencia, sujeto a la dependencia e instrucciones de jefaturas y percibiendo el pago mensual de la debida contraprestación.

En la tercera, se calificó como laboral el vínculo entre la Municipalidad de La Reina y un profesional que prestó servicios como gestor territorial, adscrito a programas ejecutados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, entre el 21 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, con obligación de cumplir un horario y de emitir un informe mensual al director encargado de la unidad supervisora, recibiendo un estipendio mensual y fijo.

En la cuarta, se arribó a dicha decisión respecto de la demandante, que prestó servicios desde el 5 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2018, para desempeñarse primero como coordinadora para posicionar el Programa contra el Maltrato al Adulto Mayor en la región, y luego, en el Programa Vínculos, que se enmarcó en la ejecución del Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor del Sistema de Protección Chile Solidario, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y en que el demandado Servicio Nacional del Adulto Mayor actuó como ente coordinador y ejecutor, contaba con oficina y guías metodológicas proporcionado por el demandado, cumplía horario que era controlado y sujeta a supervisión.

Y en la última, la parte demandante prestó servicios desde el 3 de agosto de 2015 al 1 de marzo de 2019, suscribiendo seis contratos, ejerciendo en el período de agosto de 2015 a abril de 2016 como “profesional de proyectos del programa FNDR Fortalecimiento Capital Humano de Servicios Turísticos de la Región del Maule”, cumpliendo las tareas de “encargado del proyecto en cuanto a ejecución y seguimiento en el marco del Programa FNDR”; desde mayo a



septiembre de 2016 como “profesional de proyectos del FNDR Fortalecimiento del Capital Humano de Servicios Turísticos de la Región del Maule”, desempeñando la labor de “encargado de proyecto del programa FNDR Transferencia Fortalecimiento de Servicios Turísticos de la Región del Maule”; desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017 fue contratado como “gestor de proyectos del Programa FNDR Transferencia Fortalecimiento Turístico comunas de Romeral Río Claro y San Rafael”; desde septiembre a diciembre de 2017, 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2019, r ejerció la función de “coordinador de promoción del Programa FNDR denominado transferencia bianual Identidad, Gestión y Promoción Turística de la Región del Maule”; los programas descritos, fueron financiados temporalmente mediante aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de cuya ejecución y gasto se encargó al servicio demandado, Servicio Nacional de Turismo de la Región de El Maule; el demandante asumió en cada contrato la obligación de pagar sus cotizaciones previsionales, registraba asistencia diaria y sujeto a jornada laboral, presentaba informes de su gestión durante el mismo período, que fueron visados por el director del referido servicio; además supervisaban su actividad y se le otorgaron derechos y beneficios que en cada contrato se detallaron; y, finalmente, hizo uso de todos sus feriados legales.

**Tercero:** Que la sentencia impugnada, en lo que interesa, rechazó el recurso de nulidad promovido por la parte demandante, sobre la base de los motivos previstos en los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 11 de la Ley N° 18.834 y 1, 6 y 7 del Código del Trabajo.

En cuanto al primer motivo de nulidad, tuvo presente los hechos acreditados contenidos en el motivo séptimo de la sentencia impugnada, y la conclusión del juez del grado, en cuanto la actora fue contratada en el ámbito de las facultades del artículo 11 de la Ley N° 18.834, puesto que desempeñó un cometido específico de carácter transitorio.

A continuación, citó los artículos 1 y 11 de la Ley N° 18.834, en cuanto permite al demandado contratar sobre la base de honorarios, y concluyó que el Servicio de Gobierno Interior se encontraba especialmente facultado para contratar a la actora sobre la base de honorarios, toda vez que los supuestos fácticos establecidos en la sentencia impugnada, que no fueron controvertidos por la recurrente por vía de nulidad, inamovibles en consecuencia, corresponden a los presupuestos previstos en el artículo 11 de la ley 18.834. Añadió que, conforme a los hechos asentados, corresponde calificar los servicios prestados por la demandante de transitorios, dado que los contratos tenían una duración limitada, no superiores a un año, y, en todo caso, fueron celebrados para un cometido



específico en cada caso, como se indicó en ellos, de manera que, tal como lo hace el tribunal de la instancia, cabe concluir que los referidos servicios están comprendidos en la modalidad de contratación prevista en el citado artículo 11 de la ley 18.834. En efecto, la demandante prestaba asesorías al demandado para la obtención de ciertos y determinados productos, lo que importa que su cometido era específico, y actuaba como experta en esas materias, justamente uno de los presupuestos del artículo 11 ya citado.

Y, en torno al segundo motivo, lo desestimó, puesto que la sentencia impugnada calificó acertadamente los hechos de la causa al declarar que no existió en la especie una relación laboral entre las partes, sino un contrato de prestación de servicios a honorarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, de manera que al decidir de la forma que lo hizo, rechazando la demanda, no ha incurrido en el error de derecho que se denuncia.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en las sentencias invocadas por la recurrente con lo decidido en la que ahora se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

**Quinto:** Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener presente el criterio permanente expuesto por esta Corte, reflejado en las sentencias dictadas en las causas rol N° 29.867-2018, 13.367-2019, 29.360-2019 y 24.676-2020, entre otras, en el sentido que el artículo 11 de la Ley N°18.834 establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración Pública puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto excedan o simplemente no coincidan con los términos que dispone la normativa en comento, sino que revelen caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo anteriormente señalado.

**Sexto:** Que tal razonamiento debe ser contrastado con los hechos que se tuvieron por establecidos en el fallo de base, que dio por acreditado que:



1.- La demandante y el Servicio de Gobierno Interior suscribieron convenios a suma alzada, con fechas 10 de octubre de 2019, 2 de enero de 2020, 4 de enero de 2021 y 24 de enero de 2022, en virtud de los cuales, se obligó a desempeñar asesoría para la obtención de determinados objetivos en el marco del Programa de Gestión Territorial del demandado estipulado en la cláusula primera de los citados convenios, en una primera etapa en la Gobernación de Talagante, y luego, en la Delegación Presidencial Provincial de Talagante.

2.- En los citados convenios se consigna que se imputará al ítem 05.02.01.24.03.800, el que corresponde al Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ítem “Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial”.

3.- La demandante debía cumplir jornada, que se extendía desde las 08:30 a las 17:30 horas, debiendo registrar asistencia, a partir del año 2022, además debía emitir un informe mensual de actividades y labores efectuadas para obtener el pago mensual respectivo; se encontraba sujeta a dependencia e instrucciones de sus jefaturas. En el convenio de 2022, se incorporaron menciones relativas al otorgamiento de feriado, días libres, licencia médica y permiso pre y post natal

4.- El último convenio suscrito con fecha 24 de enero de 2022, estableció una vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, consignando en la cláusula tercera la posibilidad de poner término anticipado al convenio, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar dicha decisión a la contraparte mediante carta certificada.

5.- El 31 de marzo de 2022, el Subsecretario del Interior envió carta a la actora informando que, de conformidad con lo pactado en la cláusula tercera del convenio de prestación de servicios a honorarios a suma alzada, suscrito entre las partes, a contar del día 1 de abril de 2022 se prescindía de sus servicios como asesora en la Delegación Provincial de Talagante, que le fué notificada ese mismo día, quien se negó a firmar.

**Séptimo:** Que, asimismo, cabe considerar lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, y la normativa que regula al servicio en que se desempeñó la actora y que establece sus fines y propósitos.

El primero dispone que “Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente.

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.



Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

En tanto que el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, son funciones del Delegado Presidencial Provincial, que debe ejercer, informando al Delegado Presidencial Regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas, y tendrá todas las atribuciones que el Delegado Presidencial Regional le delegue y, además, aquellas que la ley le confiere expresamente, entre otras, ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes; ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público; dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas; supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la provincia, que no dependan o se relacionen con el gobierno regional; disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial.

**Octavo:** Que tales antecedentes permiten concluir que los servicios prestados por la actora no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores no se avienen a un cometido específico, dada, principalmente, su extensión temporal, amplitud, y porque corresponde a labores referidas a actividades propias y permanentes del servicio en que se desempeñó, puesto que aun cuando se las haya enmarcado en algún programa puntual, es claro que sus objetivos coinciden plenamente con los fines que, conforme a la normativa antes citada, deben guiar su actuar.

Asimismo, se estableció que desempeñó sus labores en condiciones propias de un vínculo de subordinación y dependencia, con obligaciones de asistencia en una jornada determinada y de rendir cuenta de las tareas ejecutadas, percibiendo un estipendio fijo y mensual, características que de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio.

De manera que la presencia de esas circunstancias determina que una prestación de servicios personales, retribuida con una remuneración mensual fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.



**Noveno:** Que, en consecuencia, la decisión adoptada en el caso obedece a una errada calificación jurídica de los hechos asentados, por lo que procedía acoger el recurso de nulidad que la demandante fundó, como primera alegación, en la causal consagrada en el artículo 478 letra c) del cuerpo legal citado, al resultar necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos.

Por estas consideraciones, disposiciones legales señaladas y en conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el de nulidad deducido en contra de la de instancia de cuatro de abril de dos mil veintitrés, sustentado, en lo que interesa, en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por lo que se hace lugar al arbitrio y se declara que la sentencia de instancia es nula, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Regístrese.

Rol N° 221.103-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., la Ministra Suplente señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Quezada y la abogada integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 04/10/2024 15:56:18

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 04/10/2024 15:56:19

FABIOLA ESTHER LATHROP GOMEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 04/10/2024 15:56:19



En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.





Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 483 Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

Se reproducen los motivos primero a octavo de la sentencia del grado, suprimiéndose desde el motivo noveno y siguientes.

Asimismo, se dan por reproducidos los considerandos quinto a octavo de la sentencia de unificación que antecede.

**Y se tiene, en su lugar, y, además, presente:**

**Primero:** Que, de los hechos asentados por el fallo del grado y los antecedentes allegados por las partes, en particular, los contratos a honorarios a suma alzada, informes de gestión mensual y boletas de honorarios emitidas por la actora, se desprende que fue contratada para cumplir labores de asesoría en el marco del Programa de Gestión Territorial del servicio demandado, en una primera etapa en la Gobernación de Talagante, y luego, en la Delegación Presidencial Provincial de Talagante, desde el 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2022, y emitió mensualmente un informe detallado de la labor realizada, y percibió un ingreso que, conforme a los contratos y boletas de honorarios, correspondía a la suma de los montos pactados de manera fija y mensual, en el último período por \$896.126, y que ejecutó sus labores de manera estable y permanente en el tiempo, en condiciones propias de un vínculo bajo subordinación y dependencia.

Por otro lado, no aparece que la contratación se aleje de las actividades propias y permanentes del organismo demandado, reguladas mediante la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

**Segundo:** Que, como se observa, más allá de lo escriturado en los instrumentos, en especial en los contratos celebrados por las partes y demás documentos aparejados, fluye que, en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto de la realidad cotidiana en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir, en la práctica, los elementos que dan cuenta de aquella, conforme el artículo 7° del Código del Trabajo.

**Tercero:** Que, en cuanto a la excepción de caducidad opuesta por la demandada, aquella se funda en lo prescrito en el artículo 168 del Código del Trabajo, puesto que, entre la fecha del despido, 31 de marzo de 2022, y la de presentación de la demanda, 13 de julio de 2022, transcurrieron 85 días, excediendo con creces el plazo de 60 días que establece la ley. Por su parte, la actora en audiencia preparatoria evacuó el traslado a la excepción, y solicitó su rechazo, conforme a los fundamentos de hecho y derecho que se dan por reproducidos.



Ahora bien, de la revisión del sistema computacional, se advierte que la demanda fue presentada el 16 de junio de 2022, ingresada a tramitación en procedimiento monitorio, asignándosele el RIT M-172-2022 y, por resolución de 17 de junio de 2022, se ordenó la tramitación conforme al procedimiento de aplicación general.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendida las alegaciones efectuadas por la parte demandante, en cuanto presentó reclamo en la Inspección del Trabajo, debe necesariamente rechazarse la excepción, atendido lo sostenido por esta Corte en reiteradas oportunidades, en cuanto a que no resulta aplicable el artículo 168 sino el artículo 510 del Código del Trabajo, puesto que el ejercicio de la acción se encuentra supeditada a la decisión que recaiga en la demanda que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo, como ocurre en el caso, respecto de la cual se desprende que el término para plantearla es el de dos años desde la conclusión de los servicios, mismo que, por consiguiente, debe extenderse a la acción de despido injustificado que tiene como fundamento y antecedente esa controversia previa.

**Cuarto:** Que, en seguida, el caso debe ser analizado a la luz de los principios que informan el ordenamiento jurídico laboral, entre ellos, el de primacía de la realidad. Tal postulado es entendido, conforme lo plantea la doctrina, como aquel axioma que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, ordena dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en los hechos, perspectiva desde la cual es innegable que los establecidos conducen a concluir la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, sin que pueda ser derrotada tal conclusión con el mérito de las formalidades en que se expresó y consolidó, en la apariencia institucional, el vínculo examinado, todo ello, conforme lo expresado en los motivos pertinentes del fallo de unificación, de lo cual fluye, como conclusión irredargüible la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, y por lo tanto, regida por el código del ramo, y que, al verificarse su término el 31 de marzo de 2022, sin cumplir las formalidades que dicho texto legal dispone, su desvinculación debe calificarse como un despido injustificado, dando derecho a las indemnizaciones legales consecuentes.

**Quinto:** Que, en consecuencia, se acogerá la demanda, declarándose la existencia de la relación laboral por todo el período señalado, esto es, desde el 1 de octubre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2022, y que su término corresponde a un despido injustificado, al no haberse ajustado a las formas y causales previstos en el Código del Trabajo, por lo que la demandante tiene derecho a



percibir las indemnizaciones y recargos establecidos en los artículos 162, inciso cuarto, 163, inciso segundo, y 168, letra b), del código del ramo.

Del mismo modo, serán otorgados los feriados legal y proporcional reclamados, por no haberse acreditado su correcto otorgamiento.

**Sexto:** Que, además de las referidas prestaciones laborales, la demandante solicitó el entero de las cotizaciones de seguridad social devengadas durante todo el período y la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo.

En cuanto a la aplicación de la sanción, cabe hacer presente que se trata de un asunto unificado por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en causa Rol N° 40.253-2017, criterio que se ha reafirmado sin variación, sosteniéndose que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto que les otorgaba una presunción de legalidad y la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los grave en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada.

**Séptimo:** Que, en lo que atañe a las cotizaciones de seguridad social, cabe reiterar la premisa general invariablemente asumida por esta Corte, expresada, entre otras, en las sentencias dictadas en causas ingreso N° 14.137-2019, 18.540-2019, 19.116-2019, 29.471-2019, 28.932-2019 y 24.589-2020, en que se ha razonado en términos que el artículo 58 del Código del Trabajo dispone que: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”. Agregando que dicho descuento que afecta las remuneraciones de los trabajadores tiene el carácter de obligatorio, conforme lo regula el artículo 17 del Decreto ley N° 3.500, que expresa: “Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”, deber que se ve reforzado por el tenor expreso del artículo 19 de dicho estatuto que previene: “Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador (...) en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”. Su inciso segundo



añade que “Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”.

Por lo que se ha concluido que nuestro ordenamiento considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley; y que la naturaleza imponible de los haberes es determinada por la ley, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, atendida la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones, postura reafirmada por el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, que establece que “Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden”.

Presunción, esta última, a cuyos efectos no resulta relevante distinguir si la existencia de la relación laboral formó parte de lo discutido en el juicio y, por consiguiente, fue declarada en la decisión que se impugna, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte también ha reconocido en forma invariable, como se advierte de las sentencias pronunciadas en los antecedentes N° 6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otros, en los que se ha expresado que el pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.

**Octavo:** Que, por otra parte, sin perjuicio que la legislación impone al empleador el entero de las cotizaciones de seguridad social, previo descuento al trabajador, asignándole el rol de agente retenedor, lo cierto es que cuando el trabajador paga directamente sus cotizaciones en las instituciones pertinentes, sea porque así lo ha decidido en forma voluntaria o porque lo ha acordado con su empleador, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato a honorarios mediante el cual se formalizó la contratación en su origen, se trata de una conducta a la que debe darse valor, pues beneficia su situación previsional,



permitiéndole acceder a prestaciones de salud y/o cesantía, e incrementar los fondos con que financiará su futura pensión.

En ambos casos, esto es, pago voluntario de las cotizaciones por parte del trabajador o existencia de una cláusula en el contrato que así lo disponga, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales acciones, al entender que por su intermedio se cumple la finalidad perseguida por la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder efectivamente a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 18.

En efecto, tratándose del primero, a partir de la sentencia dictada en causa rol N° 35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos 41.026-2021, 98.552-2022 y 106.732-2023, entre otras, se ha sostenido sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones de seguridad social cuando el trabajador las ha enterado directamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado cuando es el trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, lo que torna en improcedente ordenar un doble pago de la prestación que se trata, de manera que sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no hayan sido previamente enteradas y sólo en la parte que se adeude.

En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero directo del pago mediante una cláusula incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, se ha decidido lo mismo, lo que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor también a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en un contrato de trabajo ordinario, nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo. En la sentencia dictada en causa rol N° 98.552-2022, se declaró que si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional que pueda ser imputado al demandado, lo que torna en improcedente la condena a solucionarlos.



Esta última hipótesis, con la sola excepción de las cotizaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728, pues el pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.055, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional, pero, no consideró las del seguro de cesantía; las que, en consecuencia, nunca se entendieron incorporadas en los pactos de esta naturaleza, por lo que, una vez esclarecida la naturaleza del contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicará.

**Noveno:** Que, en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, deberá ser cumplido por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y la Ley N° 17.322 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa establece, pues de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y a los artículos 21 y 22 a) de la Ley N° 17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que establecen.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante



la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la tantas veces mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N° 17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N° 3.500 y en la Ley N° 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

**Décimo:** Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, incluyendo tanto el porcentaje que es de su cargo como aquel que debió descontar oportunamente de la remuneración del trabajador, dado que, como se ha sostenido a partir de la sentencia correspondiente al ingreso N° 5.516-2023, la legislación obliga que ambas fracciones de la cotización sean solucionadas durante la vigencia de la relación laboral, lo que en la especie no fue cumplido.

Por otra parte, de ordenarse el cumplimiento parcial de la obligación, limitado únicamente al porcentaje financiado por el empleador, se estarían perjudicando las futuras prestaciones a las que el trabajador pueda acceder con



cargo a estos pagos, razonamientos que conducen a modificar lo que, en el último tiempo, se había decidido a este respecto.

**Undécimo:** Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados por la sentencia impugnada y los antecedentes allegados por las partes, de los que se desprende que la relación laboral entre las partes se desarrolló entre el 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2022, siendo formalizada a través de una sucesión de contratos de prestación de servicios a honorarios, constando que en todos se incorporó una cláusula, que hacía de cargo exclusivo de la demandante el pago de sus cotizaciones previsionales, así como las de salud común y profesional, obligación que la parte cumplió parcialmente.

**Duodécimo:** Que, por consiguiente, estando cubierta la totalidad del período servido por la referida cláusula, procede desestimar el pago de las cotizaciones de previsionales y de salud, dada la obligación asumida por la demandante, y disponer el entero de las correspondientes a seguro cesantía, equivalente al 3% de la remuneración imponible.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 425 y siguientes y 459 y siguientes, 485 y siguientes del Código del Trabajo, **y se declara que:**

I.- **SE RECHAZAN** las excepciones de incompetencia absoluta y de caducidad opuestas por el demandado.

II.- **SE ACOGE** la demanda interpuesta por doña **ANNEMARIE IRENE MULLER DURING** en contra de **FISCO DE CHILE**, en cuanto se determina la existencia de una relación laboral que se prolongó entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2022, declarándose injustificado y carente de causa el despido del cual fue objeto, por lo que **se condena** al demandado a pagar las siguientes prestaciones:

- a) \$896.126- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.
- b) \$1.792.252.- por concepto de indemnización por años de servicio.
- c) \$896.126.- correspondiente al recargo legal del 50% sobre la indemnización precedente.
- d) \$1.284.447.- a título de feriado legal.
- e) \$343.514.- a título de feriado proporcional.
- f) Cotizaciones de seguro de cesantía devengadas desde el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2022, correspondientes al 3% de la remuneración imponible, debiendo oficiarse a la entidad pertinente para los fines a que haya lugar.





III.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar en las letras a) a e) precedentes lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que las cotizaciones ordenadas pagar en la letra f) devengarán los reajustes que ordena el artículo 11 de la Ley N° 19.728, calculados desde la época y en los términos que indican, e intereses calculados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

V.- **SE RECHAZA** la demanda en cuanto a la aplicación de la sanción de nulidad del despido.

VI.- Cada parte pagará sus costas.

Se previene por la ministra **señora Chevesich** y por la abogada integrante **señora Rojas**, que, si bien tienen una postura diferente sobre la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, por los argumentos expuestos en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que tratan de la misma cuestión de derecho, declinan incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autorice su variación, tampoco que ha sido modificada; en razón de lo anterior, concurren a las restantes decisiones pues se sustentan en aquella.

Regístrese y devuélvase.

N° 221.103-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., la Ministra Suplente señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Quezada y la abogada integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente la segunda. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 04/10/2024 15:56:21

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 04/10/2024 15:56:21



FABIOLA ESTHER LATHROP GOMEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 04/10/2024 15:56:22



En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

